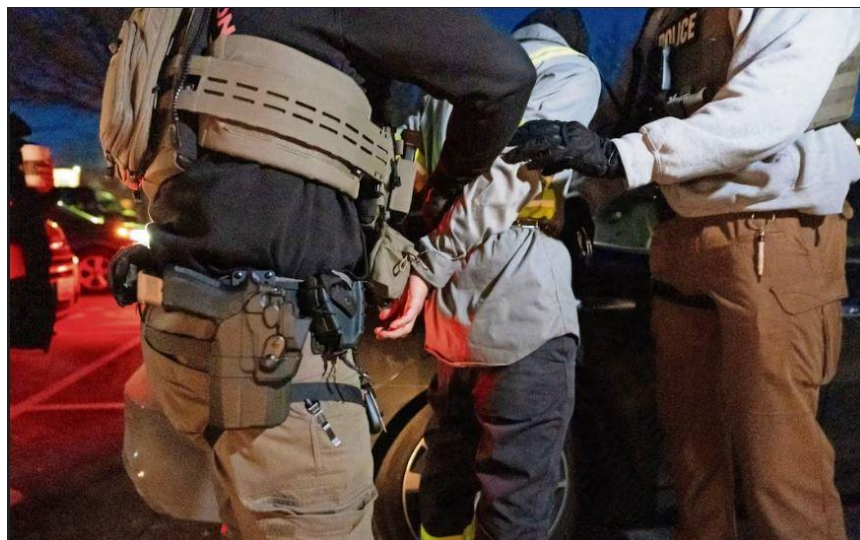


Información Migratoria Nacional

Familias mexicanas migrantes encabezan detenciones en EU



En 2025, las familias mexicanas encabezaron el mayor número de detenciones en los más de 9.8 millones de kilómetros cuadrados de territorio estadounidense, por encima de las provenientes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El reporte del organismo señala que durante ese año fueron capturadas 39 mil 34 familias mexicanas, mientras que las originarias de Venezuela sumaron 27 mil 953; las de Honduras, 13 mil 209, y las de Guatemala, 9 mil 643. En ese mismo periodo, los mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, al concentrar una proporción relevante del total de encuentros migratorios registrados por la autoridad fronteriza.

El extitular del Instituto Nacional de Migración e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tonatiuh Guillén López, asegura que el asedio del gobierno de Donald Trump contra los migrantes ha alcanzado niveles extremos, con el uso de una fuerza de carácter paramilitar y una agresividad que, afirma, deja de lado consideraciones humanitarias.

“Para los agentes estadounidenses no hay frente a ellos personas, sino cuotas de aprehensión. Poco importa si se trata de infantes, mujeres o adultos mayores, ni siquiera si se detiene a ciudadanos de Estados Unidos con rasgos asociados al estereotipo racial de un imaginario inmigrante”, comenta.



La organización Human Rights Watch señala que el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional para impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras.

“Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos”, precisa.

Desde entonces —añade— agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el aparato encargado de ejecutar las deportaciones, rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y profundizan el clima de miedo en comunidades migrantes.

“Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país”, afirma John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos del organismo. “Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump”.

A este escenario se suma que la ley federal de presupuesto para 2025 destinó una cifra sin precedentes de 170 mil millones de dólares al control fronterizo, la detención y las deportaciones, consolidando el endurecimiento de la estrategia migratoria.

Desde enero de 2025, al menos ocho personas han muerto por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos y otras 32 fallecieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en un contexto de expansión de operativos y cuestionamientos por el uso de la fuerza.

En paralelo, las detenciones migratorias han superado el millar diario en distintos momentos del año, de acuerdo con reportes oficiales.

El diario The Washington Post reportó que desde julio de 2025 agentes enmascarados del ICE han disparado en al menos 16 ocasiones contra civiles durante operativos o protestas en ciudades con alta presencia de la policía migratoria.

Guillén López menciona que bajo esta segunda gestión de Donald Trump se han registrado más de 600 mil deportaciones hasta el momento, de las cuales cerca de 40% corresponden a mexicanos.



“Esto nos deja con una cifra de alrededor de 240 mil eventos. Cada uno durísimo, muy cruel, en donde no hay solamente una cuestión de infracción migratoria, sino hay un acto que vulnera derechos humanos, que puede separar familias, que puede separar a los hijos de sus padres y madres, puede descomponer comunidades, puede implicar pérdida de bienes y de ingresos. Entonces, hay una situación que literalmente puede destrozarle la vida a una persona y a una familia”, comenta.

Agrega que, aunque esas cifras son relevantes, no alcanzan las expectativas planteadas por el gobierno estadounidense, en parte por la resistencia social y política.

“Lo que las ha frenado también es el rol de los jueces, que todavía sigue siendo importante en los procesos migratorios y de detención. Aunque han sido insuficientes, mantienen un peso. La concentración donde ha habido mayor agresividad del ICE corresponde a poblaciones mexicanas, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos en general.

“Ahí hay una acción deliberada del ICE en las detenciones no motivadas por razones jurídicas, que se respetan muy poco, sino por apariencia; ese es otro factor que explica el mayor número de mexicanas y mexicanos detenidos y expulsados”, expresa.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, considera que ante las políticas antiinmigrantes y agresivas de Donald Trump, especialmente las implementadas a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los últimos cinco meses, todas las personas migrantes, sin importar su nacionalidad, están en riesgo.

“México encabeza la lista porque también encabeza la lista de entrada a ese país, tendencia que hemos visto en diversos periodos de tiempo. Somos una de las diásporas más importantes en la Unión Americana, con más de 35 millones de personas de primera, segunda y tercera generación, y cerca de 5 millones de indocumentados”, señala.

Expone que las políticas del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional no priorizan a migrantes con perfiles criminales o que hayan cometido delitos graves.

“Hoy todos son prioridad porque hay cuotas: 3 mil detenciones diarias, y eso ha llevado a que aumenten las detenciones de personas sin ningún récord criminal.



“Incluso, todo esto ha derivado en la detención de más de 170 ciudadanos estadounidenses y en más de 32 muertes de personas migrantes en instalaciones gubernamentales de detención. Y lo que es peor: ha habido detenciones de niñez migrante; casos emblemáticos como el de Liam, además de reportes de más de 400 niños y niñas detenidos, lo que vulnera el Acuerdo Flores, que establece estándares para la protección de la niñez migrante”, advierte. [*\(María Cabadas, El Universal, 8 Columnas\)*](#)

Deportaciones, Estadísticas y La Narrativa





El debate sobre inmigración en Estados Unidos suele estar marcado por declaraciones contundentes y promesas ambiciosas. Sin embargo, al analizar las cifras con detenimiento, la brecha entre la retórica y la realidad se hace evidente.

En su primer año de mandato, el presidente Donald Trump afirmó haber deportado a más de 675.000 personas. Si bien es una cifra significativa, sigue siendo inferior a las 685.000 registradas durante el último periodo del presidente Joe Biden. El contraste es notable porque, a pesar de una mayor presencia policial y un uso más directo de la fuerza, el total de deportaciones aún no ha alcanzado el objetivo de un millón anual.

Es importante diferenciar entre arrestos, detenciones y deportaciones. El número de arrestos dentro del país ha aumentado, en parte porque los cruces fronterizos han disminuido drásticamente. Bajo la administración Trump, ahora se reportan alrededor de 7000 cruces por mes, una cifra significativa se observa una disminución en comparación con las cifras de 100.000 a 200.000 que se registraban habitualmente durante la administración Biden. Con menos presión en la frontera, la aplicación de las leyes de inmigración ha centrado su atención en el interior del país.

Sin embargo, no todos los arrestados son detenidos, y no todos los detenidos son deportados. Este matiz suele pasarse por alto en el debate público, donde el número de arrestos se equipara a menudo con las deportaciones efectivas.

Otro elemento clave es la historia que rodea el perfil de los detenidos. Las autoridades han señalado la presencia de presuntos pandilleros y terroristas entre los arrestados. Sin embargo, la definición de "terrorista" se ha ampliado en los últimos años para incluir a ciertos grupos criminales, lo que ha modificado la percepción pública del tema. La mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales, salvo el de haber ingresado ilegalmente al país, lo que generalmente se considera una infracción administrativa y no un delito.

Esta distinción es importante porque la retórica política suele presentar el fenómeno como una amenaza para la seguridad nacional. Por consiguiente, a menudo se agrupan el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular en una misma categoría, aunque en la práctica sus perfiles y riesgos sean muy diferentes.

Al mismo tiempo, el costo de esta política es significativo. Un informe de senadores demócratas reveló que se gastaron más de 400 millones de dólares para deportar tan solo a 300 personas a terceros países, lo que en algunos casos representó casi un millón de dólares por persona.



Esto no incluye los 170 mil millones de dólares asignados por el Congreso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante cuatro años. Con estos fondos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada del control migratorio, ahora cuenta con el mayor presupuesto de cualquier agencia de aplicación de la ley en el país.

El uso de acuerdos con terceros países se ha convertido en una herramienta clave. Hasta la fecha, se han registrado 25 acuerdos de este tipo, la mayoría con naciones latinoamericanas y caribeñas. México ocupa un lugar central en este contexto. A finales del año pasado, había recibido a casi 12 000 migrantes no mexicanos deportados de Estados Unidos, generalmente mediante transferencias de tierras a bajo costo.

Sin embargo, la falta de transparencia en torno a estos acuerdos plantea interrogantes sobre el futuro de estas personas. México enfrenta restricciones legales para su detención y, en muchos casos, no puede deportarlas a sus países de origen. Esto genera situaciones de limbo migratorio que podrían tener implicaciones jurídicas y humanitarias internacionales dentro del territorio mexicano.

Además, si bien el aumento de las deportaciones es un objetivo clave de la administración Trump, estas representan solo una pequeña parte de los aproximadamente 13,7 millones de personas que se estima que viven en situación irregular en Estados Unidos. La magnitud del problema supera con creces la capacidad operativa anual del sistema.

Esto plantea una cuestión fundamental: ¿puede una estrategia basada casi exclusivamente en la aplicación de la ley y la expulsión resolver un problema también relacionado con los mercados laborales, las tendencias demográficas y las cadenas económicas transnacionales?

En definitiva, la actual administración no ha aprobado nuevas leyes de inmigración; en cambio, ha reinterpretado marcos regulatorios que llevaban décadas sin una reforma sustancial. Sin una modernización legislativa integral, el sistema seguirá siendo vulnerable a cambios de enfoque dependiendo del partido político que esté en el poder.

El verdadero debate no gira solo en torno a cuántas personas son deportadas, sino a si el sistema de inmigración estadounidense puede adaptarse a las realidades del siglo XXI sin depender únicamente de ciclos de endurecimiento y flexibilización política. *(Ariel Ruiz Soto, Heraldo de USA, p. 8)*

Protestan en Hermosillo contra el ICE y la “guerra imperialista” de EU

Integrantes de organizaciones sociales, colectivos y activistas se manifestaron ayer frente al consulado de Estados Unidos en esta ciudad, contra las políticas migratorias restrictivas y en defensa de la autodeterminación de las naciones. La protesta inició alrededor de las 17:30 horas bajo una temperatura cercana a los 40 grados centígrados.

Los participantes desplegaron mantas y pancartas con mensajes en apoyo a Cuba, Palestina, Irán y Venezuela y corearon consignas en defensa de la soberanía de América Latina.

Centraron sus posicionamientos en el rechazo a las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al que acusaron de incurrir en prácticas que vulneran derechos humanos, como detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y separación de familias.

Durante el acto, que contó con la participación del Colectivo Ayotzinapa, se reiteró que la migración es un derecho humano reconocido en el marco jurídico internacional.

“Ningún ser humano es ilegal”, fue una de las consignas centrales, junto con el señalamiento de que las políticas migratorias actuales criminalizan la pobreza y restringen derechos fundamentales.

Manifestaron su rechazo a lo que denominaron “guerra imperialista” y exigieron el cese de conflictos armados que, señalaron, impactan directamente en los flujos migratorios a nivel global.

Además de las demandas internacionales, se solidarizaron con luchas locales, en particular con los sindicatos de la Universidad de Sonora, que mantienen demandas laborales en curso.

Reunión pro Palestina

Con música y poesía, distintas organizaciones se congregaron la tarde del ayer al pie del Hemiciclo a Juárez para manifestarse contra el apartheid en territorio palestino.

La Plataforma Común por Palestina y otros grupos sociales demandaron justicia tras el genocidio cometido por Israel en la franja de Gaza y repudiaron la política imperialista de la asociación entre este país y Estados Unidos. También expresaron su solidaridad con Cuba. [\(Cristina Gómez Lima, La Jornada, Política, p. 4\)](#)

Mundial de Fútbol, FIFA 2026

Menores migrantes se alistan para su Mundial



A menos de tres meses de que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será coanfitrión, el balón ya rueda en las canchas improvisadas de la capital mexicana, en los pies de cientos de niños migrantes y refugiados que viven en albergues y que ya organizan su propio torneo de fútbol, como parte de un proyecto de integración.

Desde finales de febrero, niños y niñas migrantes, enfundados en camisetas azules proporcionadas por la Unión Europea (UE), han entrenado en canchas improvisadas para un torneo que se celebrará a finales de abril en la Ciudad de México.

La iniciativa forma parte del proyecto Goles por la Inclusión, impulsado por la delegación de la Unión Europea, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de utilizar el fútbol como herramienta para promover la integración, la protección y la convivencia pacífica entre menores que han tenido que abandonar sus hogares.

En muchos de los albergues en los que viven los menores, el acceso a espacios de juego es limitado o inexistente, lo que hace que, iniciativas de este tipo, no sólo sean una oportunidad para el esparcimiento, sino también un espacio de socialización, aprendizaje y fortalecimiento emocional de niños y niñas.



Para algunos de los padres migrantes, el torneo es mucho más que una actividad deportiva: representa esperanza, unión familiar y normalidad, en medio de una situación difícil.

Joel Orta, migrante venezolano de 26 años que vive en un albergue en Tepito, en la Ciudad de México, al acompañar al entrenamiento a su hijo Matías, uno de los participantes, compartió su perspectiva: “El deporte no tiene fronteras. La pelota está aquí o allá”, dijo, al destacar que iniciativas como ésta permiten que los menores se desarrollen y socialicen fuera de las habitaciones de los albergues.

La iniciativa busca dar visibilidad a los derechos de los menores migrantes y refugiados, al promover su integración con las comunidades de acogida y contribuir a construir redes de apoyo social en un contexto de movilidades humanas complejas.

Aunque desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, en enero pasado, los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido drásticamente, las organizaciones humanitarias advierten que los desafíos para las personas migrantes no han terminado.

Se estima que alrededor de 300 mil personas permanecen en México en condición de movilidad humana, muchas sin los medios para regresar a sus países de origen, y otras que enfrentan amenazas continuas que dificultan su tránsito o permanencia.

La iniciativa Goles por la Inclusión se desarrolla en albergues y espacios facilitados por el Gobierno capitalino y organizaciones civiles, con el fin de fortalecer la cohesión entre la niñez migrante, refugiada y la comunidad mexicana. [\(Claudia Arellano, La Razón, México, p. 12\)](#)

Información Migratoria Internacional

Estados Unidos

Hacen del sur de Texas 'cárcel' para migrantes



Brownsville.- La captura en enero pasado del niño Liam Conejo, de 5 años, a manos de agentes migratorios del ICE en Minneapolis y su traslado a un centro de detención próximo a la ciudad texana de San Antonio indignó a la opinión pública estadounidense y llevó a una movilización que concluyó con su liberación.

El caso evidenció una realidad más dramática: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en funcionamiento múltiples instalaciones para mantener detenidos a migrantes y el sur de Texas se ha convertido en una zona central para esta red que ha desplegado la Administración de Donald Trump.

Más dramáticas aún son las denuncias sobre la improvisación de los llamados "Centros de Procesamiento de Migrantes", donde familias con niños han padecido brotes de sarampión y otras enfermedades ante la reclusión que se llega a extender por varios meses, cuando debería ser de máximo 20 días.

El centro de Dilley, donde fueron confinados Liam y su padre ecuatoriano Adrián - liberados en febrero-, forma parte de esta red de al menos 10 instalaciones que van de San Antonio a Brownsville pasando por Laredo y llegando a la turística Isla del Padre.

Este sitio había sido cerrado durante la Administración del Presidente demócrata Joe Biden, pero en abril pasado fue reabierto y está manejado por la empresa privada CoreCivic, cuyo manejo ha sido tan cuestionado que se han registrado manifestaciones de los migrantes detenidos.

Desde su reapertura, reportó The New York Times, más de 3 mil 500 personas, principalmente niños y sus padres, han pasado por Dilley, donde la atención médica ha sido abiertamente criticada.

En el centro se han registrado casos graves, como el de la bebé Amalia, de 18 meses y con ciudadanía mexicana, que debió ser hospitalizada en febrero entre denuncias de sus padres venezolanos de que estuvo a punto de morir, sin medicinas ni alimentación suplementaria, pese a padecer una agresiva infección respiratoria por Covid-19.

En los últimos días de febrero se conoció el caso de Juan Nicolás, un bebé de 2 meses que sufría de bronquitis, y nuevamente se acusó una falta de atención médica. El lactante y su madre fueron deportados a México tras la denuncia pública de maltrato.

Dilley no es el único sitio polémico y, por ejemplo, el centro de Puerto Isabel, ubicado en Los Fresnos, entre la Isla del Padre y Brownsville, ya fue escenario de una manifestación en su interior por las condiciones de confinamiento.

El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado que se niegue tratamiento médico oportuno a los detenidos por agentes del ICE y ha defendió al centro de Dilley y el resto que tiene por todo Estados Unidos. (*Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 4*)

Dicen ir por lo 'peor'; detienen a familias





Brownsville.- Desde que regresó a la Casa Blanca hace más de un año, el Presidente Donald Trump ha sostenido que busca detener a "lo peor de lo peor" con su ofensiva migratoria, que ha convulsionado ciudades como Minneapolis y Los Ángeles, y ha llenado centros migratorios en el sur de Texas, en la frontera con México, y el resto de Estados Unidos.

Sin embargo, las cifras del Servicio de Inmigración (ICE) arrojan que menos del 14 por ciento de los casi 400 mil extranjeros detenidos entre el 21 de enero de 2025 y 31 de enero de 2026 tenía cargos o condenas por delitos violentos, publicó la cadena CBS News citando un documento oficial.

La activista Gladys Cañas, que durante años ha apoyado a migrantes desde Matamoros, acusó que las autoridades estadounidenses no se están enfocando en criminales, sino en extranjeros sin antecedentes penales, muchos de ellos que están regularizando su estatus migratorio.

"Muchas de las personas que son detenidas enfrentan procesos de residencia permanente y eso no nos parece justo", dijo Cañas, que preside la asociación civil Ayudándoles a Triunfar.

"Estas personas viven con miedo, ya no están saliendo de sus casas, están prácticamente secuestradas en sus casas para evitar que las detengan injustamente".

Miles de estos detenidos, una gran parte de ellos familias con niños, han terminado en los llamados centros de procesamiento de ICE en el sur de Texas, donde migrantes detenidos acusan malos tratos y falta de atención médica adecuada.

El centro de ICE en Dilley, cercano a la ciudad de San Antonio, es uno de las instalaciones más criticadas por poner en riesgo a los internos, principalmente familias con sus hijos.

Un caso es el de la niña Amalia, una ciudadana mexicana hija de venezolanos, fue recluida junto a sus padres desde el 11 de diciembre.

"La pequeña Amalia nunca debería haber sido detenida. Casi muere en Dilley", denunció la abogada Elora Mukherjee en la demanda que introdujo para conseguir su liberación, lo que logró a principios de febrero. *(Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 4)*

Arribo de Mullin atenúa el discurso, no la dura política antimigrante en EU



El senador Markwayne Mullin, ex campeón de artes marciales mixtas, tiene muchas posibilidades de ser ratificado esta semana por la Cámara alta como secretario de Seguridad Interna en sustitución de la primera persona despedida del gabinete del presidente Donald Trump ante la creciente ira pública y protestas contra las tácticas antimigrantes del gobierno federal; pero el cambio de personal no implica una modificación en la política de detención y deportación masiva, ni el lucro y corrupción por ese negocio.

La necesidad de modificar el mensaje antimigrante fue revelada la semana pasada en una reunión de líderes republicanos en Doral, Florida (en un hotel de Trump, lo que es negocio para la familia), donde estrategas del partido recomendaron a legisladores que buscan su reelección en los comicios intermedios en noviembre no enfocarse en las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados; más bien enfatizar sólo la expulsión de "criminales".

Nueva estrategia republicana

Para el Partido Republicano "se trata de la deportación de criminales violentos y no expulsiones masivas", explicó uno de los participantes sobre el nuevo mensaje político a The Washington Post.

"En conversaciones con sus asesores y su esposa, Melania, Trump está convencido de que algunas de las políticas de su gobierno son demasiado extremas y que a los votantes no les gusta la frase de 'deportación masiva'", reportó The Wall Street Journal.



La reacción pública-y la protesta masiva en más de 100 ciudades de todo Estados Unidos- ante imágenes de agentes enmascarados en uniformes de combate que derriban puertas de hogares y violentamente arrestan niños y a sus padres en las calles, en particular los incidentes en Mineápolis, donde agentes asesinaron a dos ciudadanos, fueron el factor clave en la decisión de Trump de despedir a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interna, a la que pertenecen las agencias federales de control migratorio y seguridad fronteriza.

El presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, reconoció que la política migratoria de este gobierno está "en una corrección de curso ahora mismo", después de que provocó "una irritación pequeña con votantes hispanos y latinos" por tácticas demasiado duras. Aunque los demócratas son minoría en el Senado, han logrado hasta ahora bloquear el financiamiento del Departamento de Seguridad Interna al demandar que el gobierno acepte algunos cambios en la manera en que lleva a cabo sus operaciones antimigrantes.

Los abusos de agentes migratorios en sus operativos y la aparente decisión de no cumplir órdenes judiciales indican una creciente crisis legal y, por sus consecuencias, de violación a derechos humanos en el país. Jueces federales han emitido más de 7 mil fallos en meses recientes declarando que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha encarcelado a personas sin permitirles un debido proceso. Más aún, las crecientes quejas por organizaciones de activistas, libertades civiles y políticas sobre las condiciones insalubres y crueles dentro de centros de detención de inmigrantes, incluida la detención de unos 4 mil niños, siguen en gran medida sin respuesta por el gobierno, más allá de ignorarlas o descalificarlas.

Aunque el gobierno de Trump ha sufrido reveses en los tribunales, como los fallos de la Suprema Corte que declararon ilegal el despliegue de la Guardia Nacional y tropas militares en Chicago y Los Ángeles, y que más de mil jurisdicciones alrededor del país siguen manteniendo sus políticas de "santuario" con órdenes de que sus fuerzas de seguridad locales y estatales no colaboren con autoridades federales en perseguir a inmigrantes, entre otras expresiones de rechazo a las políticas actuales, no hay indicaciones de un cambio de curso.

Proceden los planes diseñados por Stephen Miller, jefe del gabinete y arquitecto de la política antimigrante. El departamento de Seguridad Interna ha adquirido almacenes para convertirlos en "megacárceles" para incrementar la capacidad de detención a 90 mil personas. Por ahora, la dependencia mantiene bajo detención a 70 mil inmigrantes, un número sin precedente desde que se creó esta dependencia en 2002. Y avanza la contratación de otros 10 mil agentes este año.



"Estamos en un momento interesante... el público finalmente ve qué implica la detención y la deportación masiva", comentó Sarah Mehta, experta en inmigración de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Ap. "No es una agencia que desacelera, está realmente procediendo con algunas de las políticas más crueles".

Miller, se mantiene como el asesor clave

Agentes migratorios detenían mil 115 personas en promedio al día hasta febrero, cuatro veces más que en el último año del gobierno de Joe Biden, reportó The New York Times.

Menos de 14 por ciento de los arrestados en el primer año de la administración de Trump tenían historial de delitos, reportó CBS News.

Recientemente, Miller intentó vincular su agenda contra los extranjeros con la guerra a las drogas.

"Uno de los hechos menos entendidos sobre la inmigración ilegal es que cada indocumentado paga a los cárteles para orquestar su cruce por la frontera. Los asesinatos, secuestros y tráfico de fentanilo es financiado por estos mismos viajeros que de manera fraudulenta exigen asilo", escribió en redes sociales en febrero.

Miller sigue como un asesor clave de Trump, siempre presente en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca. Aunque algunos asesores esperan que la sustitución de Noem Kristi por Mullin podrá cambiar algunas cosas que han generado tanta oposición pública y política, Miller continúa manejando una sesión diaria entre funcionarios para evaluar si logran cumplir el objetivo de un millón de deportaciones al año.

Mullin buscará reconstruir la reputación dañada del Departamento de Seguridad Interna -al asegurar que bajo su mando instruirá que "en la mayoría de los casos" sus agentes obtendrán una orden judicial antes de entrar en hogares, un paso que ha sido ignorado hasta ahora a pesar de que supuestamente es obligatorio bajo la ley- tarea podría ser imposible.

Una encuesta de The Washington Post registró que una mayoría, 58 por ciento, de los estadounidenses opinan que el gobierno de Trump ha sido demasiado extremo en su política de deportación, un incremento de ocho puntos desde fines del año pasado.

Más allá de las demandas de opositores y críticos, también se intensifican las consecuencias económicas de deportar mano de obra. El senador republicano Ron Johnson comentó que son los inmigrantes los que se encargan de ordeñar las vacas en las granjas lecheras de su estado, Wisconsin, y que agrupaciones de restauranteros le han informado que los necesitan para sus operaciones. "¿Podemos darle vuelta atrás al reloj y que todos los que llegaron sin documentos regresen", comentó a la agencia Ap.

"Son gente trabajadora, apoyando a sus familias, contribuyendo a sus comunidades", afirmó. ([Jim Cason y David Brooks, La Jornada, P.p.](#))

EU anuncia despliegue de agentes de ICE en aeropuerto



Agentes de ICE serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos desde el lunes. Esto en medio de la creciente congestión en las terminales por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso.

El presidente Donald Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana. Funcionarios ya trabajan en un plan.

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.

"No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso", dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán "donde puedan proveer seguridad extra", como monitoreando las salidas.

"Hoy diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana", confirmó.

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que cree que la situación "empeorará" en los próximos días.

"A medida que empeora, creo que eso presiona al Congreso para que llegue a una resolución", afirmó Duffy en ABC. ([Redacción, 24 Horas, P.p.](#))

(*Agencias, Milenio, Fronteras, p. 16*)

(*Staff, Reforma, Internacional, p. 13*)

(*Afp, Excélsior, Global, p. 20*)

(*José López Zamorano, El Financiero, P.p.*)

([Redacción, La Razón, Mundo, p. 40](#))

(*Afp y Ap, El Heraldo de México, Orbe, p. 34*)

(*Afp y EFE, El Sol de México, Mundo, p. 25*)

Seguridad

Por homicidio y delitos sexuales, EU entrega 2 mexicanos a la FGR



El gobierno de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dos ciudadanos mexicanos que eran buscados por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio y delitos sexuales.



El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) detalló que se trataría de Silvia N, buscada por el delito de homicidio, y de Salvador N, requerido por las autoridades por actos lascivos contra una persona menor de edad, ambos detenidos por el sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza.

A través de un comunicado publicado este 21 de marzo, la dependencia estadounidense señaló que el arresto de las dos personas de origen mexicano que se encontraban de manera irregular en el país norteamericano tuvo lugar debido a las órdenes de arresto que había en su contra.

El documento cita a la subsecretaria interina Lauren Bis, quien culpó a la administración del expresidente Joe Biden del ingreso a Estados Unidos de migrantes con antecedentes penales en su país de origen, acusando que esto pone en peligro a la ciudadanía norteamericana.

Están de regreso en México

“Gracias a nuestras fuerzas del orden, estos dos migrantes con antecedentes penales están de regreso en México para enfrentar la justicia por sus crímenes”.

El arresto de Silvia, quien habría ingresado a Estados Unidos en 2023, ocurrió el pasado 26 de febrero en Anaheim, California.

Por otro lado, la detención de Salvador ocurrió el pasado 6 de marzo en Lemon Grove. Este sujeto ingresó de manera legal a la nación vecina en 2021, pero su visa quedó revocada debido a los delitos de los que se le acusa en México.

La entrega de ambos detenidos se realizó en cumplimiento de los tratados de colaboración judicial entre ambos países para que los acusados enfrenten los procesos penales correspondientes en territorio mexicano.

Dicha acción ocurre en el marco de intensa actividad de cooperación bilateral. Apenas este jueves, La FGR señaló que se detuvo a siete fugitivos buscados por Estados Unidos por delitos graves, incluyendo narcotráfico, abuso sexual y homicidio.

Además, de los recientes encuentros entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y el director del FBI, Kash Patel, para reforzar la coordinación en el combate al crimen organizado y agilizar procesos de extradición, así como con el director de la Administración de Control de Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

FGR dicta sentencia

En otro caso, la Fiscalía General de la República dictó 60 años de prisión contra un exservidor público del sector educativo por delitos sexuales cometidos en agravio de una adolescente.

Los hechos datan de septiembre de 2015, cuando se inició la averiguación y el proceso penal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Durante el juicio, se acreditó la responsabilidad de Omar N en el delito de violación equiparada agravada, cometido en cinco ocasiones mientras se desempeñaba como servidor público. ([Redacción, 24 Horas, México, p. 6](#))

Cae por intentar cruzar armas a EU



Una mujer fue detenida al pasar por el carril de automóviles en el Puente Internacional Mesa de Olay, al norte de Tijuana; en una maleta transportaba 42 cartuchos de distintos calibres, 5 cargadores, 3 navajas, un chaleco táctico y tres radios de comunicación. (Redacción, La Razón, Estados, p. 15)

Allanan oficina del Centro "Fray Matías", en Tapachula, Chiapas



Allanaron las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en el municipio de Tapachula, Chiapas, las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en el municipio de Tapachula, Chiapas, por personas desconocidas, dieron a conocer ayer.

Centro de Fray Matías es saqueado con cosas de valor

Presuntamente, sustrajeron equipos de cómputo, teléfonos celulares y documentos relacionados directamente con su labor de defensa y acompañamiento a población migrante.

De acuerdo con la organización, al llegar por la mañana a sus instalaciones, el equipo constató que la intrusión se realizó a través del patio trasero.

La persona responsable habría intervenido las cámaras de seguridad y revisado todas las oficinas, pues dejó rastros de su presencia en distintos espacios antes de llevarse los materiales.

El Centro expresó especial preocupación debido a que otros objetos de valor no se robaron, lo que –señaló– “sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con nuestra labor de defensa”.

La organización advirtió que este hecho no solo representa una pérdida material, sino también un riesgo directo para la seguridad del equipo y para la continuidad de su trabajo.

Asimismo, indicó que el incidente se suma a otros eventos de seguridad registrados en meses recientes, los cuales ya se notificaron al mecanismo federal de protección para personas defensoras.



Aunque el Centro cuenta con medidas de protección, denunció que, tras reportar el allanamiento, los elementos de seguridad tardaron varias horas en acudir al lugar, pese a las reiteradas solicitudes.

Hacen llamado al Gobierno

Ante ello, el organismo hizo un llamado al Gobierno Federal para que, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, implemente de manera urgente medidas eficaces que garanticen la integridad de su equipo y permitan continuar con su labor.

El caso, señaló la organización, evidencia un “patrón sistemático de hostigamiento, vigilancia, criminalización y persecución” contra quienes defienden derechos humanos en el país. Subrayó además que la protección de la información y la integridad de las personas defensoras es una obligación del Estado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y aseguró que este acto intimidatorio no detendrá su trabajo.

El organismo forma parte de una red nacional de instituciones civiles, cuyos integrantes también exigieron protección inmediata. “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, expresaron. ([Argenis Esquipulas, 24 Horas, Estados, p. 11](#))

Remesas

Disminuyen remesas de México hacia otros países, revela análisis del Conapo

La caída de los flujos migratorios que ha acompañado a la política de exclusión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha impactado en las remesas hechas desde México hacia otros países.

Según un análisis del Consejo Técnico del Consejo Nacional de Población (Conapo), durante 2025 se registró un envío desde México a otros países por mil 183 millones de dólares, lo que representó una contracción de 9.6 por ciento respecto al año anterior.

Con ello, se rompió la tendencia de crecimiento sostenido de este tipo de remesas desde 2013, y que en 2024 alcanzaron la cifra de mil 308 millones de dólares.



También se modificaron los lugares de destino. El año pasado, Estados Unidos y Colombia concentraron 58.6 por ciento de estas remesas. A la par, los envíos a Guatemala, Honduras y República Dominicana sumaron en conjunto 8.6.

En 2024, se detalla en el reporte, Estados Unidos y Colombia concentraron la recepción con 64.2 por ciento, pero al mismo tiempo se identificaron en ese momento “destinos emergentes” con los casos de Haití, Venezuela y Argentina, que representaron en conjunto 5.1.

Sobre el reciente documento publicado por Conapo, se agrega que en 2025 las remesas desde ese país a México fueron de 61 mil 791 millones de dólares, 4.6 por ciento menos que en 2024, “con lo que se rompió una racha anual de crecimiento sostenido desde 2014”.

Casi la mitad de las remesas recibidas en México durante 2025 se originaron en California y Texas, con 46.2 por ciento, “con contribuciones combinadas que sumaron 27 mil 709 millones de dólares”.

Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México fueron las entidades con mayores ingresos por remesas, con 24 mil 102 millones de dólares, es decir, 39 por ciento del total.

Mientras, el municipio de Tijuana se posicionó como la demarcación con mayor recepción, con 967 millones de dólares. [\(Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 11\)](#)